



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso: Ordinario Laboral
 Radicación: 05001-31-05-013-2021-00149-01
 Demandante: Rubiela de Jesús Marín de Castaño
 Demandado: Colpensiones
 Asunto: Apelación y consulta
 Procedencia: Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín
 Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique
 Temas: Retroactivo pensión de invalidez, intereses moratorios

Medellín, marzo veintinueve (29) de dos mil veintitrés (2023)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO con ausencia justificada y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandante y de Colpensiones, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de la entidad pública en los aspectos no controvertidos, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 31 de enero de 2023, en el proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por la señora RUBIELA DE JESÚS MARÍN DE CASTAÑO en contra de la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
COLPENSIONES. Radicado 05001-31-05-013-2021-00149-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora RUBIELA DE JESÚS MARÍN DE CASTAÑO, convocó a juicio a COLPENSIONES E.I.C.E, pretendiendo se declare que le asiste derecho Al reconocimiento del retroactivo pensional desde el momento en que se estructuró su estado de invalidez, como consecuencia de lo anterior, se condene a la demandada al reconocimiento y pago de las mesadas retroactivas con sus correspondientes aumentos, causadas desde el 22 de noviembre de 2018 y hasta el momento que le fue reconocida la pensión, con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y/o la indexación.

Como sustento de tales súplicas, se expuso que la señora Rubiela de Jesús Marín de Castaño, solicitó a Colpensiones el reconocimiento de prestación de invalidez el 6 de julio de 2020, en atención a ello, la accionada otorgó la prestación mediante Resolución SUB 151838 a partir del 1º de agosto de 2020, acto administrativo que no incluyó el retroactivo de las mesadas pensionales desde el 22 de noviembre de 2018, fecha de estructuración el estado de invalidez.

Se narró que, contra el acto administrativo referenciado, se interpusieron los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos desfavorablemente por medio de las Resoluciones SUB 167352 del 4 de agosto de 2020 y DPE 13644 del 6 de octubre de 2020.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al escrito inaugural, aceptando como ciertos los hechos de la misma, no obstante, se opone al éxito de las pretensiones, formulando las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocer el retroactivo de la pensión de origen común; inexistencia de la obligación de pagar intereses moratorios; improcedencia de la indexación; prescripción; imposibilidad de condena en costas; buena fe; compensación y la innominada o genérica.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 31 de enero de 2023, el Juzgado de conocimiento declaró que a la señora Rubiela de Jesús Marín de Castaño, le asiste derecho al retroactivo de la pensión de invalidez liquidado desde el 27 de junio de 2019 hasta el 31 de julio de 2020, en consecuencia, condenó a Colpensiones a pagar a la accionante la suma de \$12.051.848, por concepto de retroactivo causado en el periodo señalado, igualmente, condenó a Colpensiones al reconocer y pagar los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, sobre el valor del retroactivo, a partir del 7 de noviembre de 2020 hasta su pago; autorizó a Colpensiones a efectuar los descuentos respectivos con destino al sistema de seguridad social en salud y condenó en costas a la entidad llamada a juicio.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

Interpone recurso de apelación en cuanto a la fecha de reconocimiento del retroactivo, que no corresponde al momento en que se estructuró la invalidez de la demandante, 22 de noviembre de 2018, considerando que no hay incompatibilidad en el pago de subsidios por incapacidad y la pensión de

invalidez, ya que no se trata de una pensión de origen profesional, agregando que no puede supeditarse el pago de ese retroactivo al reconocimiento de incapacidades, porque la autonomía financiera y contable del sistema de salud y las prestaciones que contenga, se conceden independientemente de las consagradas para los riesgos de invalidez y muerte de origen común.

Sostuvo que, por tratarse de una enfermedad de origen común, los recursos que financian las prestaciones provienen de dos sistemas diferentes, unos del sistema de salud y otros del sistema de pensiones que es distinto en el caso de que prestación fuera parte del sistema de riesgos laborales.

Colpensiones

Presenta recurso de apelación de manera parcial en lo referente a la condena de intereses moratorios, considerando que no es procedente, atendiendo que para la entidad, se configura una de las excepciones que ha venido decantando la jurisprudencia con relación a la imposición de los intereses moratorios, en primera medida porque la entidad ha hecho una evaluación minuciosa de la ley y en segunda medida por cuanto en sede administrativa, no se dio cumplimiento a los requisitos exigidos.

Resaltó que, es obligación del afiliado allegar de manera completa y adecuada, todos los documentos al momento de iniciar la reclamación administrativa, para que la entidad empiece a evaluar si es procedente el reconocimiento de la prestación que reclama, cosa que tal como se motivó por la señora juez en la sentencia no sucedió en el proceso objeto de estudio, ya que se allegó una certificación de incapacidades de una EPS a la cual no pertenecía la demandante, lo que indudablemente llevó a que la entidad definiera su prestación a corte de nómina con fundamento a lo que probatoriamente tenía acceso la entidad en sede administrativa, por lo tanto, se configura una

excepción, y la entidad está cobijada por la norma que regía para el momento en que hizo el reconocimiento.

Por último, solicita que en caso que se considere que, si hay lugar a la imposición de los intereses moratorios, la condena no sea a partir de los 4 meses como se indicó en el fallo, sino que la misma se haga conforme lo indicado en el artículo 4° de la ley 700 de 2001 y la sentencias T588 de 2003 y SU065 de 2018, es decir, se ordenen a partir de los seis meses.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunció la apoderada de la Colpensiones, reiterando los argumentos esbozados en la sustentación del recurso de apelación, a fin de que se revoque la condena a los intereses moratorios o subsidiariamente, se ordenen transcurrido el término de seis meses.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

De igual forma procede la consulta, en los aspectos no apelados, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social que dispone “*También serán consultadas las sentencias*

de primera instancia cuando fueren totalmente adversas a la Nación, al Departamento o al Municipio o a aquellas entidades descentralizadas en las que la Nación sea garante”.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que Colpensiones, por medio de dictamen DML 4195 del 22 de abril de 2020, calificó a la demandante, estableciendo una pérdida de la capacidad laboral del 60.4%, de origen común, estructurada el 22 de noviembre de 2018, –ver folios 115 a 121 del anexo 13 del expediente digital.
- Que por Resolución SUB 151838 del 15 de julio del 2020, Colpensiones le reconoció la pensión de invalidez a la actora, a partir del 1° de agosto de 2020, en cuantía de \$877.803, acto administrativo que reposa a folios 22 a 28 del anexo 04 del expediente digital, decisión que fue confirmada a través de las Resoluciones 167352 del 4 de agosto de 2020 y DPE 13644 del 06 de octubre de 2020, véase folios 11 a 15 y 17 a 21 del anexo 03 del expediente digital.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si se encuentra ajustada a derecho la sentencia objeto de apelación y consulta, proferida por la señora Juez Trece Laboral del Circuito de Medellín el 31 de enero del año en curso, verificando para tal fin, si le asiste el derecho a la demandante al reconocimiento y pago del retroactivo de la pensión de

invalidez, a partir del 22 de noviembre de 2018, fecha de estructuración del estado de invalidez de la actora?

¿Si hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual: i) la demandante, tiene derecho al retroactivo de la pensión de invalidez a partir del 27 de junio de 2019, es decir, desde el día siguiente a la fecha en que recibió el último pago del subsidio de incapacidad, y no desde la estructuración de la invalidez ; ii) no es procedente el reconocimiento de los intereses moratorios regulados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, teniendo en cuenta que Colpensiones, resolvió la solicitud pensional de la actora, con apego a la normatividad aplicable al caso y la prueba que le fue aportada en sede administrativa, por lo tanto, la sentencia debe ser REVOCADA en el numeral tercero, para en su lugar absolver a Colpensiones del reconocimiento de los intereses moratorios, y CONFIRMADA en lo demás.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

En relación con la fecha de disfrute de la pensión de invalidez, el legislador tiene establecido como regla general que la misma debe ser percibida efectivamente a partir de la fecha en que se estructura la contingencia, momento a partir del cual el asegurado debe beneficiarse de la protección otorgada por el sistema ante una situación que lo coloca en desventaja o debilidad.

Con anterioridad a la expedición de la Ley 100 de 1993, el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, prescribió:

“ARTÍCULO 10. DISFRUTE DE LA PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN. La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio.”

Norma que fue reproducida por la Ley 100 de 1993, en el artículo 40 al establecer:

“DISFRUTE DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ POR RIESGO COMÚN. La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructura tal estado. Cuando el beneficiario estuviera en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio”

La Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia, itera el criterio de reconocimiento de la pensión de invalidez, a partir de la fecha de estructuración del estado invalidante, en sentencia SL1575 del 2018, que rememora las sentencias SL, 2 ago. 2011, rad. 39766, SL 838 de 2013 y SL12753 de 2014, de la Sala Permanente y en la cual se expuso: *“Por lo tanto, es la fecha de estructuración de la invalidez la que debe ser tomada como referente para determinar el surgimiento del derecho a la pensión de invalidez y la normatividad que lo regula.”* (Negrillas y subrayado fuera de texto).

Téngase presente que esta pauta normativa, esta excepcionada en los casos en los cuales el afiliado ha disfrutado del subsidio de incapacidad, en los cuales,

por disposición legal, la fecha de disfrute lo será la del último pago de incapacidad, al observarse incompatibles ambas prestaciones.

Así lo recordó la Corte Constitucional en la sentencia T140 de 2016

“Ante este panorama normativo, se tiene que la pensión de invalidez sería incompatible con el pago de incapacidades por enfermedad temporal, habiendo lugar a solo una de estas prestaciones por la afectación del estado de salud del actor, lo que significa que no habría lugar al pago de incapacidades en los periodos que llegaren a ser cubiertos por la pensión de invalidez desde la fecha de estructuración de la enfermedad de origen común ya que de lo contrario se estaría obligando a la parte accionada a hacer dos pagos por un mismo hecho, esto es, la pérdida de la capacidad laboral del afiliado.»

2.6.- CASO CONCRETO

En el asunto sometido a consideración de la Sala, se tiene que Colpensiones mediante Resolución SUB 151838 del 15 de julio de 2020, le reconoció la pensión de invalidez a la actora, a partir del 1º de agosto del 2020, en cuantía de \$877.803, tal y como se vislumbra a folios 22 a 28 del anexo 03 de expediente digital, decisión confirmada por medio de las Resoluciones SUB 167352 del 04 de agosto de 2020 y DPE 13644 del 06 de octubre de 2020.

Persigue la activa, el reconocimiento del retroactivo pensional desde la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, desde el 22 de noviembre de 2018, tras considerar que no existe incompatibilidad alguna, entre el reconocimiento de los subsidios de incapacidad cancelados por la EPS y las mesadas pensionales por invalidez, apreciación que no es compartida por esta judicatura, pues es claro, tal y como lo sostuvo la a quo, que por disposición legal se presenta una incompatibilidad en dicho sentido, razón por la cual, lo procedente es el reconocimiento de la pensión de invalidez, una vez el afiliado

deja de percibir los subsidios de incapacidad, con independencia de que los mismos hubieran sido cancelados por la EPS.

Así las cosas, se tiene que la EPS Medimás, en respuesta a oficio decretado por el juzgado, allegó certificación de incapacidades (consúltese el folio 7 del anexo 23), del cual se desprende, que para la fecha de estructuración de la invalidez de la señora Rubiela de Jesús Marín, esto es, 22 de noviembre de 2018, la misma venía percibiendo subsidios de incapacidad, los cuales le fueron cancelados de manera ininterrumpida desde el 13 de noviembre de 2018 hasta el 31 de marzo de 2019 y posteriormente se le canceló dicho subsidio del 12 de junio de 2019 al 27 de junio de 2019.

De lo anterior, es claro, que la prestación económica de la pretensora, debe reconocerse a partir del 28 de junio de 2019, tal y como fue ordenado por la funcionaria de primer grado, conclusión que guarda armonía, con lo señalado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 5170 de 2021, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz, al indicarse:

“Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario precisar su doctrina, en el sentido de señalar que cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019)”.

Se sigue de lo anterior, que resulta procedente confirmar el reconocimiento del retroactivo de la pensión de invalidez a partir del 27 de junio de 2019, día siguiente a la última incapacidad que le fue cancelada a la pretensora, subsiguientemente la Sala bajo la égida de la consulta revisa la liquidación del retroactivo pensional efectuada por el juzgado de conocimiento, encontrando

que la misma se encuentra ajustada, siendo claro igualmente, que en el caso concreto no operó el fenómeno prescriptivo.

Sobre los intereses moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 regula la causación de los intereses moratorios de la siguiente manera:

“INTERESES DE MORA. A partir del 1° de enero de 1994, en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta Ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago”.

En cuanto el término que tienen las administradoras para decidir lo referente al reconocimiento de las pensiones, el Decreto 656 de 1994 en su artículo 19 señala que: “...El Gobierno Nacional establecerá los plazos y procedimientos para que las administradoras decidan acerca de las solicitudes relacionadas con pensiones por vejez, invalidez y vejez, sin que en ningún caso puedan exceder de cuatro (4) meses...” , en similar sentido quedó establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003, norma posterior a la Ley 700 de 2001.

Pues bien, la mora tiene, por regla general, una valoración objetiva del término y se da como compensación por los perjuicios que para el afiliado genera el retardo en el reconocimiento y pago de las mesadas pensionales. Conforme al artículo 141 citado, los intereses moratorios se causan desde el momento en que vence el plazo que tienen las administradoras para resolver la solicitud, porque a partir de su finalización, la prestación es exigible y el deudor se encuentra en mora, así lo tiene sentado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia:

“Advierte la Corte que no le asiste razón a la censura puesto que de manera reiterada y pacífica ha adoctrinado que la condena por intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 opera de manera automática cuando, a partir del momento de la solicitud, la prestación no se otorga dentro de los plazos establecidos en las disposiciones legales” (CSJ SL4601-2019).” SL. 508 de 2020 MP. Clara Cecilia Dueñas Quevedo.)

Pese a lo antedicho, la Corte Suprema de Justicia, ha decantado los supuestos en los cuales no se tornan procedentes los intereses moratorios, es así como en la sentencia SL079 del 21 de enero de 2021, recordó:

“Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 no son procedentes en los siguientes casos: i) Cuando se trata de prestaciones pensionales consolidadas antes de la vigencia de la Ley 100 de 1993 ii) Cuando existe incertidumbre respecto de los beneficiarios o titulares del derecho pensional, iii) Cuando las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer la pensión tienen plena justificación porque encuentran respaldo normativo, iv) Cuando el reconocimiento deviene de un cambio de criterio jurisprudencial, v) Cuando se reconoce por inaplicación del principio de fidelidad, vi) Cuando el pago de las mesadas pensionales no superó el término de gracia que la ley concede a la entidad que deba conceder la prestación pensional y vii) Cuando la prestación se reconoce bajo el principio de la condición más beneficiosa.”

En el caso bajo análisis, a juicio de la Sala, no son procedentes los intereses moratorios, toda vez que la negativa de Colpensiones al reconocimiento del retroactivo pensional se encuentra justificada y encuentra respaldo normativo en la incompatibilidad de percibir el subsidio de incapacidad y la mesada pensional, tal y como lo sostiene la apoderada recurrente, encontrando que, desde el 6 de julio de 2020, Colpensiones requirió a la demandante a fin de que aportara certificación de la EPS de pago de incapacidades o certificación de no pago de incapacidades, requerimiento que no fue satisfecho en debida forma, en tanto que se aportó certificación expedida por la EPS Sura, entidad

que no era la prestadora de salud de la pretensora, quien tenía afiliación a Medimás.

Aunado a lo anterior Colpensiones, tanto en las Resolución SUB 167352 de 2020 y DPE 13644 de 2020, requirió a la actora para que allegara certificado de la EPS Medimás, sin que se encuentre acreditado en este juicio, que la gestora del proceso hubiera dado cumplimiento a dicho requerimiento, destacándose que esta judicatura ha considerado que, en estos eventos, si bien la administradora de pensiones podía administrativamente recopilar la información, como lo señaló la funcionaria de primera instancia, es a la parte demandante a quien le corresponde acreditar que no recibió los subsidios de incapacidad, pues se encuentra en una mejor posición para aportar dicha prueba que corresponde a su historia clínica, sin que se pueda trasladar tal responsabilidad probatoria a Colpensiones, sumado a que la demandante desatendió, sin justificación acreditada, los requerimientos de la entidad en este sentido.

Concluyéndose que es solo en el trámite del presente juicio, que la actora logra acreditar la procedencia del retroactivo perseguido y conforme lo probado, para el momento en el cual la accionante reclamó su derecho pensional, no se aportó la documentación necesaria a fin de que la prestación económica se reconociera con su retroactivo pensional y no a corte de nómina, relevando que, conforme al artículo 40 de la Ley 100 de 1993, la pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de la parte interesada, situación que ha señalado la jurisprudencia (consúltese la sentencia SL5170 de 2021), comporta una carga para el asegurado de aportar toda la documentación necesaria para el reconocimiento de su derecho, esto es, para el caso concreto, los certificados de subsidios por incapacidad que le fueran reconocidos por la EPS.

Por lo expuesto, le asiste razón a la accionada en cuanto no hay lugar al reconocimiento de los intereses deprecados, debiéndose revocar el numeral

tercero de la sentencia confutada, en el sentido de absolver a Colpensiones del reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, siendo sí procedente, ordenar a Colpensiones el pago de la indexación, la cual constituye un factor que compensa la pérdida de valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, desde el momento en que se causó cada mesada pensional y hasta el pago efectivo de la obligación.

Costas en esta instancia a cargo a la parte demandante y en favor de Colpensiones, inclúyase como agencias en derecho en esta instancia, la suma de \$580.000.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **REVOCA** el numeral tercero de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, el 31 de enero de 2023, en el proceso ordinario instaurado por la señora RUBIELA DE JESÚS MARÍN DE CASTAÑO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, para en su lugar, **ABSOLVER** a COLPENSIONES del reconocimiento y pago de los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y **CONDENAR** a la entidad al pago de la indexación de las mesadas pensionales adeudadas.

2.- Se **CONFIRMA** la sentencia en lo demás.

3.- Costas en esta instancia a cargo a la parte demandante y en favor de Colpensiones, inclúyase como agencias en derecho en esta instancia, la suma de \$580.000.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE

CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

(Sin firma por ausencia justificada)